

Nº 212
Volumen II
Año LXX
Julio-Diciembre 2002
Fundada en 1933
ISSN 0303-9986



REVISTA DE DERECHO

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION^{MR}

Facultad de
Ciencias Jurídicas
y Sociales

NUEVOS ASPECTOS DE LA NULIDAD DE DERECHO PUBLICO

BALTAZAR MORALES ESPINOZA
Universidad de Concepción

I. INTRODUCCION

En los más de 15 años de tratamiento del tema “nulidad de derecho público”, mucho se ha avanzado por la doctrina y jurisprudencia sobre la temática en comentario, lo que ha permitido un importante desarrollo a esta institución publicista.

En efecto, todo lo relativo a antecedentes formales, características, y cuestiones procesales se encuentra bastante consensuado entre los autores y los tribunales superiores de justicia.

La motivación de este trabajo es hablar y compartir sobre cuestiones que dicen relación con algunos aspectos no abordados de esta nulidad. El propósito es referirnos: 1. al carácter único de la nulidad de derecho público; 2. a la naturaleza popular o pública de la acción; y 3. a la necesidad de regulación normativa de la temática relativa a la prescriptibilidad o no prescriptibilidad de la misma.

II. UNICIDAD DE LA NULIDAD DE DERECHO PUBLICO

Un sector de la doctrina sostiene que es necesario distinguir en la nulidad publicista dos tipos o clases de nulidad de derecho público: la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad. La última, para aquellos actos que adolezcan de vicios de poca significación o relevancia. La primera de las nombradas, para los casos de defectos importantes, de fondo, sustantivos.

Esta distinción en materia de nulidad de derecho público, que es considerada entre otros por el profesor Pedro Pierry Arrau, se realiza basado o amparado en lo que sobre la materia contienen entre otras las legislaciones española y francesa, países europeos que en su legislación interna –Ley de Proc. Administrativos– contemplan efectivamente las distinciones apuntadas.

Junto a lo anterior se agrega un argumento de carácter práctico, cual es que a entidades de vicios diversos, las acciones y consecuencias jurídicas también cambien, y evidentemente no puedan ser las mismas. Además de que no se ve lógico, ni razonable, la circunstancia de que la actuación que adolezca de un pequeño vicio sea sancionada de la misma forma que aquel otro afectado por un defecto de gran envergadura.

La posición planteada no se comparte por este suscrito, al entender y sostener que la nulidad de derecho público contemplada en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, art. 7 de la Carta Fundamental, es de una sola entidad, contiene una sola categoría de nulidad, un solo tipo de ella, sin que sea posible distinguir o diferenciar categorías de nulidad pública como es la pretensión antes indicada.

El art. 7 inc. tercero de la Carta Política a la letra expresa: “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

En este sentido los antecedentes históricos sobre el instituto y la norma en estudio lo confirman. En efecto, la norma transcrita viene del art. 4 de la Constitución de 1925, y art. 160 del Código Político de 1833. A su vez la referencia más inmediata al último precepto nombrado lo encontramos en el llamado “voto particular” de Mariano Egaña Fabres, que a su turno corresponde al proyecto de reforma presentado por él mismo con ocasión de la modificación a la Carta de 1828. Así en el art. 17 de aquel voto particular se preceptúa: “Ninguna magistratura, individuo particular o reunión de personas puede atribuir, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad o derechos que no le estén confiados por la Constitución o la ley. Todo acto en contrario es nulo”.

Al articulado en general del “voto particular” de Egaña se le atribuyen como antecedentes algunos de los ensayos constitucionales anteriores, como también algún texto extranjero, por ej., la Constitución española de 1812. Sin embargo y para su artículo 17, no consta en los registros históricos o en las actas de estudio, un referente previo determinado, que indique o sea base de indicio en contrario, constituyéndose en definitiva tal precepto en una verdadera creación de Egaña Fabres.

El Acta Constitucional N° 2 denominada "Bases Esenciales de la Institucionalidad Chilena", D.L. N° 1.551 de 13 de septiembre de 1976, en su art. 6 inc. segundo recreaba la terminología del actual texto constitucional en lo que interesa.

En suma, nuestra norma en estudio lleva más de 165 años de madura y permanente vigencia en nuestras leyes fundamentales, alzándose en pilar permanente de nuestra vida republicana e institucional sin que nunca, en momento alguno, haya sido concebida, considerada o entendida en una perspectiva de establecer categorías, clasificación o distinción al interior de la misma.

Lo expuesto trae como consecuencia, concreta y directa, que cualquiera sea la magnitud, momento o fuente del vicio, defecto o infracción legal, la consecuencia siempre es y será una sola: nulidad de derecho público con las características ya sabidas.

La conclusión precedentemente apuntada podrá ser compartida o no, podrá ser razonable o exagerada, podrá en definitiva ser justa o no, sin embargo lo real y concreto es que la norma existe, está redactada en la forma apuntada, es clara y categórica, tiene una historia precisa y conocida y por ello no queda más, en términos del art. 6 de la Carta, que someterse al imperio del inciso final del art. 7 de la Carta Fundamental y aceptar y hacer cumplir que cualquier infracción a la Constitución o la ley se castiga con la nulidad pública.

III. NULIDAD DE DERECHO PUBLICO. ACCION POPULAR O PUBLICA

De manera ya pacífica se señala en nuestro medio que el art. 19 N° 3 inc. primero y segundo de la Carta Política consagra de manera general el llamado "derecho a la acción". En efecto la norma indica: La Constitución asegura a todas las personas: N° 3, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir, o perturbar la debida intervención del letrado si hubiera sido requerida.

Desde el punto de vista procesal, el profesor Bernaldes en el seno de la Comisión Redactora del Anteproyecto de la Constitución la define como "el poder, más que la facultad de obligar al tribunal a proveer o sea el derecho de proveimiento, como algunos lo llaman. Es un poder de los particulares o de un organismo determinado, ... y un deber, función pública de los tribunales de

proveer”¹. Es indudable que el ejercicio de los derechos que el constituyente de 1980 asegura en el numeral mencionado se materializa en la práctica en el denominado “derecho a la acción”, que es el vehículo procesal para llegar hasta los tribunales de justicia.

Este derecho a la acción, al relacionarlo con el art. 7 inc. final nos permite arribar a la denominada “Acción constitucional de nulidad pública” propiamente tal. En efecto nuestra Constitución consagra en el art. 7 inc. final el denominado principio de legalidad o juridicidad, cuya infracción tiene como consecuencia una sanción precisa, cual es la nulidad de derecho público, la que a su vez será citada, impetrada o solicitada a través de su correspondiente acción, esto es, la acción constitucional de nulidad ya indicada, y que resulta precisamente de la vinculación de el arts. 19 N° 3 incs. primero y segundo y art. 7 inc. final del Texto Fundamental².

Establecido lo anterior, y en el ámbito del Derecho Público, afirmamos derechamente la naturaleza popular o pública de la acción constitucional de nulidad de derecho público. Si bien hay alguna doctrina e incluso legislación comparada que establece diferencias conceptuales entre ambas expresiones –popular y pública–, para lo que interesa, que es la titularidad de la acción, hay gran uniformidad de que en ambos tipos de acción el titular de la misma es cualquier integrante de la comunidad. Siguiendo al profesor Sánchez Torres, las acciones populares existen “... para proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia económica”.

“Las llamadas acciones populares constituyen una facultad especial que se concede a todas las personas para que acudan ante los jueces, con el fin de impugnar actuaciones u omisiones de las autoridades o de los particulares que atentan contra el interés público o los bienes de la comunidad, entendida esta última como una pluralidad de sujetos, más o menos amplia, sea determinable o no”.

La acción pública es aquella que busca la “... defensa del ordenamiento jurídico y la supremacía de la Constitución nacional, sin que se puedan buscar directamente finalidades particulares”³.

¹ R.D. J. 1986, Primera Parte, p. 123.

² Se hace presente que la nulidad de derecho público también puede ser invocada por vía de excepción, y además declarada de oficio por un tribunal.

³ Carlos Ariel Sánchez Torres, Mecanismos de protección de los derechos fundamentales, Edición Fondo de Publicaciones Institución Universitaria, Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Primera edición, 1995, p. 57.

Nos parece claro y primario que a todos los integrantes de la comunidad nacional –personas e instituciones– nos afecta e interesa, de manera colectiva o general, la conservación, mantención y preservación de elementos o principios tan básicos como son la supremacía constitucional, la juridicidad, la vigencia del ordenamiento jurídico, etc., en definitiva, el respeto al Estado de Derecho.

En efecto, la preservación y preeminencia del Estado de Derecho es un tema que convoca a todos los integrantes de la comunidad nacional, administrados y órganos, y no hay duda que una contribución importante para aquello es el uso de este “guardián constitucional” o “defensor del bloque de legalidad”, como es la acción constitucional de nulidad apuntada. Siendo la nulidad pública y su acción establecida y concebida por el constituyente como el remedio a las infracciones al Estado de Derecho, forzoso es concluir que en la mantención de dicho Estado tenemos interés todos, ya que sin él la democracia en su forma de vida y faceta jurídica y nuestros derechos más esenciales y básicos, sencillamente son avasallados y ya no existen.

En suma, el interés colectivo y social en la preservación del Estado de Derecho justifica y legitima latamente la naturaleza popular o al menos pública de la acción de nulidad comentada.

Lo expuesto nos lleva a controvertir a aquella parte de la doctrina que exige un interés patrimonial o al menos moral para el ejercicio de la acción en comento. Creemos que a la luz de lo explicado, tal requisito no es procedente y la legitimación para actuar en este ámbito existirá siempre y ella estará dada por el fin último o bien jurídico que se busca cautelar, como es la preservación del Estado de Derecho.

Reforzando las ideas precedentes, es oportuno recordar que la nulidad pública se ubica en el art. 7 inc. final, es decir, como corolario de dos importantes principios jurídicos, a saber, como son el principio de juridicidad que consagra el precepto mencionado, y también el de la supremacía constitucional recogido en el art. 6 de la Carta Política. En la misma línea normativa, hay que consignar que la institución en estudio se ubica destacadamente en el cap. I del Código Político, que contiene, como el propio texto lo indica, “las bases de la institucionalidad”, bases que como todos sabemos inspiran y orientan el texto constitucional y todo nuestro ordenamiento jurídico.

En otra línea de argumentos, hay que tener a la vista igualmente que nuestra legislación ya en diversos textos recoge y consagra acciones de carácter popular. Así se mencionan: a) la acción de protección en los casos en que se invoca el derecho a la vida a propósito de huelgas de hambre o transfusiones sangui-

neas⁴; b) el reclamo de ilegalidad municipal o de Gobierno y administración regional en los casos en que se invoca un interés general; c) la denuncia de obra ruinosa en la legislación urbanística; d) el ejercicio de la acción ambiental en la normativa sobre medio ambiente.

Del mismo modo la jurisprudencia de nuestros tribunales se ha pronunciado sobre el tema estableciendo el carácter de interés colectivo que lleva envuelta la nulidad pública. Así la Excm. Corte Suprema dijo: "Que respecto de este capítulo, tratándose en la especie de una nulidad de derecho público, en la que se implican no sólo el interés privado del actor, sino también el de la sociedad, en cuanto las actuaciones de los poderes públicos no pueden salirse del marco rígido de su competencia, so pena de transgredir el Estado de Derecho a que se encuentran indefectiblemente subordinados..." G.J. N. 217, 1998, p. 85.

En la misma línea apuntada, el máximo tribunal del país reiteró la idea expuesta al declarar: "Tratándose de una nulidad de derecho público, en la que se implican no sólo el interés privado del actor sino también el de la sociedad, en cuanto las actuaciones de los poderes públicos no pueden transgredir el estado de derecho..." G.J. N. 209/ 1997/ p. 67.

En el Derecho Comparado existen varios ordenamientos jurídicos que consagran en su articulado de rango constitucional acciones populares. Así, entre otros textos, tenemos:

– La Constitución Política de Colombia de 1991 en su art. 242 inciso primero prescribe: "Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo anterior..."

– La Constitución peruana de 1993 en su art. 200 N° 5 explica, en materia de garantías constitucionales, que la acción popular procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

– La Ley Fundamental alemana de 1949 en su art. 93 N° 4 dice, que cualquiera podrá ocurrir al tribunal constitucional cuando haya sido lesionado en sus derechos y otros principios de orden constitucional.

En fin creemos aportar un conjunto de antecedentes, para concluir de manera fundada que la nulidad pública dispone de una acción de naturaleza

⁴ Hugo Castellón Venegas, *Ius Publicum* N° 6, 2001, pp. 101 y ss.

popular o pública, que puede ser ejercida por cualquiera que invoque como interés absolutamente suficiente la mantención del Estado de Derecho.

IV. NECESIDAD DE REGULACION NORMATIVA EN MATERIA DE PRESCRIPTIBILIDAD

De manera contemporánea, y en forma ya bastante uniforme tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia, se han perfilado de manera muy clara y nítida dos grandes posiciones o posturas en torno al tema de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de la acción constitucional de nulidad de derecho público.

La discusión en los planos mencionados es, sin duda, de las más controvertidas e interesantes en el ámbito publicista y de las más antiguas en el tiempo. Por lo mismo, los expositores de uno y otro planteamiento y sus argumentos son abundantemente conocidos por los integrantes del mundo jurídico. A manera de mera ilustración baste mencionar entre los sostenedores de la prescriptibilidad a los autores profesores Pierry Arrau, Oelkers, Camus, etc., entre otros, quienes en términos amplios y resumidos indican: a) la pertinencia de aplicar las normas del Código Civil en materia de prescripción; b) la existencia de cuerpos normativos que contemplan en sus disposiciones normas de prescriptibilidad para contenciosos administrativos particulares; c) necesidad de la certeza o seguridad jurídica; d) consecuencias económicas incalculables por demandas indemnizatorias basadas en reivindicaciones históricas; e) derecho comparado, como el francés o español, que distingue diversas acciones de nulidad pública, todas con plazos de prescripción.

La posición doctrinaria expuesta ha encontrado su correlato en la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. Así se mencionan entre otros fallos:

–“Que, por otra parte, la denominada acción de nulidad de derecho público encuentra su basamento constitucional en los artículos 4, 23 y 75 de la Carta Fundamental y ninguno de estos preceptos le atribuyen expresamente el carácter de imprescriptible, luego tal vacío debe llenarse por aplicación por los principios generales de derecho y, supletoriamente, del Código Civil.

Ahora bien la institución de la prescripción no es ajena al derecho administrativo, toda vez que ha sido acogida en el Estatuto Administrativo (artículos 94, 152 y 155) y en otros cuerpos legales; tampoco es extraña a

esta rama del derecho la seguridad jurídica, valor de primera importancia para el derecho, a cuya protección precisamente apunta la institución de la prescripción". G.J. N. 221, 1998, pp. 84 y ss.

– "Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, en ausencia de una sistemática jurídica que regule alguna suerte de imprescriptibilidad adquisitiva, entrar a consagrarla, forzando los textos jurídicos, resulta de especial gravedad, puesto que es posible producir un efecto negativo que constituya un germen de degradación de la sistemática imperante, que puede, incluso, ser el comienzo de una alteración que puede afectar las bases mismas de la sociedad.

Que por otra parte, la afirmación de que no cabe aplicar en materia de derecho público, normas de derecho privado, a falta de un texto legal que, para casos específicos, resuelva esa materia, resulta carente de toda sustentación en la sistemática jurídica nacional. Es así como los efectos de la ley, su obligatoriedad, su vigencia, sus efectos temporales, su territorialidad, los casos de su aplicación extraterritorial, su interpretación y su derogación, se encuentran regulados por las normas del Título Preliminar del Código Civil y es imposible sostener que dichas materias son absolutamente inherentes al derecho y al orden público". G.J. N. 223, 1999, pp. 98 y ss.

– "Que la institución de la prescripción, destinada a dar certeza y seguridad jurídica a las actividades que conforman la vida de relación de una comunidad, no puede ser ajena a las obligaciones que encuentran su fuente en el Derecho Público. Tal espíritu se encuentra plasmado en nuestra legislación al disponer el artículo 2.497 del Código Civil, que las normas relativas a la prescripción se aplican por igual a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen libre administración de lo suyo". G.J. N. 266, 2002, pp. 92 y ss.

En el otro extremo están los profesores Soto Kloss, Oviedo Soto, etc., entre otros, quienes afirmando la imprescriptibilidad indican de manera general y sintética: a) los antecedentes históricos de la nulidad pública chilena hacen que el instituto en estudio constituya una creación jurídica propia con sus especiales características; b) el derecho constitucional de la propiedad de los particulares, principalmente en su relación con el Estado; c) el principio constitucional básico de que en un Estado de Derecho, el Estado sujeto jurídico debe responder; d) las

finalidades de la nulidad pública, como son la salvaguardia de la supremacía constitucional y respeto a la juridicidad, y la defensa de los derechos fundamentales del individuo; e) el contenido patrimonial de la restitución o pretensión indemnizatoria que lleve envuelta la nulidad pública no significa que deba aplicarse el derecho común, en reemplazo de la ley fundamental.

Los autores que sustentan la imprescriptibilidad también han visto la culminación de sus planteamientos en la jurisprudencia superior. Así tenemos:

– “Que tratándose en la especie de una nulidad de derecho público, en la que implican no sólo el interés privado del actor sino también el de la sociedad, en cuanto las actuaciones de los poderes públicos no pueden transgredir el estado de derecho, forzoso es admitir que las reglas del derecho común no pueden tener aplicación sino cuando las normas del derecho público se remitan a ellas o cuando la naturaleza de la institución admita que el derecho público se integre con normas comunes; y en la especie indudablemente no corresponde esta integración cuando de lo que se trata es de sancionar la posible omisión en que habría incurrido el actor al demorar el inicio de este juicio, porque para alcanzar semejante efecto se requeriría de una expresa remisión a las normas del derecho común que permitieran privar de la acción de nulidad de derecho público por el transcurso de un cierto lapso, lo que por otra parte exigiría admitir que los actos que contravienen el artículo 7 de la Constitución Política de la República pudieran purgarse del vicio que los aqueja al cabo de cierto término, lo que pugna con el propio tenor del precepto citado en cuanto señala que tales actos son nulos y originan las responsabilidades y sanciones que la ley le señale...; en consecuencia, no existiendo en el derecho público una norma que declare prescriptible la acción ejercida en estos autos, ni otra similar al artículo 1.683 del Código Civil que priva de la acción de nulidad absoluta común por saneamiento del acto en razón del transcurso de diez años, no cabe extender analógicamente el alcance de los artículos 2.515 y 2.520 a un caso en que la naturaleza de los hechos guarda cierta semejanza con aquéllos previstos en las normas citadas...”. G.J. N. 209, 1997, p. 67 y ss.

– “...no puede menos que aceptarse que tratándose de una acción de nulidad de derecho público, además de los intereses de la actora, en relación con la juridicidad de los actos de la administración, también está el de la sociedad, motivo por el cual las normas de derecho privado que han sido

invocadas por la demandada ninguna relación tienen con la acción de estos autos, porque ésta se rige por las normas de derecho público que no han previsto ningún precepto que las haga aplicables a la materia, y porque la sanción prevista en el artículo 4 de la Constitución Política del año 1925 concurre aún en caso de circunstancias extraordinarias, lo que debe interpretarse que los actos desarrollados en contravención a la norma tampoco pueden sanearse por el transcurso del tiempo". G.J. N. 222, 1999, p. 65 y ss.

– "Que debe tenerse especialmente en cuenta que en el caso de autos se trata de la nulidad de derecho público consagrada en el art. 4 de la Constitución Política de 1925 y art. 7 de la actual, la que por su origen y materia sobre la cual recae, difiere de la nulidad de derecho privado, ya que esta última rige situaciones producidas entre particulares o entre éstos y el Estado, cuando el Estado actúa como Fisco dentro del ámbito del derecho privado. Desde luego la nulidad de derecho público no puede sanearse, pues no hay forma de hacer desaparecer el vicio que afecta al acto nulo y de ello deriva que la acción para pedir su declaración sea imprescriptible". G.J. N. 229, 1999, p. 72 y ss.

Finalmente, y para efectos de completar el panorama descrito, existe una tercera posición que es posible individualizar, y que señala que se debe distinguir entre la acción de nulidad pública propiamente tal –que sería efectivamente imprescriptible– y las consecuencias patrimoniales de la misma –que serían prescriptibles–. Esta última posición, que aparece como intermedia a las anteriores, con una formulación doctrinaria informal, también ha tenido un reconocimiento jurisprudencial. Así los tribunales han señalado:

– "Que necesario resulta hacer presente que no existe contradicción en sostener, por una parte, que la acción de nulidad de derecho público es imprescriptible y, por otra, que sea posible a quien tenga la calidad de poseedor en virtud de un título nulo, por aplicación del artículo 7 de la Constitución Política, adquirir por prescripción el dominio de la cosa que posee. En realidad, se trata de dos situaciones diferentes, la primera de ellas se refiere a la nulidad del acto jurídico de derecho público en sí mismo, susceptible de ser opuesta en cualquier tiempo que se pretenda hacerle producir efectos, la segunda incide en los efectos ya generados por dicho acto, los que se consolidan o extinguen de manera definitiva por el transcurso

del tiempo, en conformidad a las reglas generales. Esto permite, a su vez, conjugar de manera armoniosa la necesaria sanción legal de nulidad para aquellos actos que transgreden nuestro ordenamiento y la prescripción como arbitrio de paz social y seguridad jurídica". RDJ, Tomo 96, 1995, segunda parte, sección quinta, pp. 284 y ss.

La verdad es que todo lo expuesto hasta aquí no encierra novedad ninguna, y sólo corresponde a una simple recopilación del estado actual de la cuestión en los planos ya indicados.

El objetivo de estas líneas es llamar precisamente la mayor atención para comprender lo expuesto y entender que el escenario actual, así como ha sido descrito, no es posible ni dable de mantener y menos aceptar.

En efecto, la situación planteada, en que se presentan dos y hasta tres claras posiciones antagónicas, tiene nefastas consecuencias que corroen brutalmente la base misma de nuestra institucionalidad. La ambivalencia expuesta, que no es sólo de academia o teórica –en lo que se refiere a la doctrina–, sino también práctica, de la realidad –manifestada en fallos judiciales–, viola, transgrede, importantes principios jurídicos de la convivencia nacional. Principios jurídicos tan relevantes, y básicos, como son la juridicidad, el control jurisdiccional de la administración, la responsabilidad del Estado, el bien común, la certeza o seguridad jurídica, etc., resultan enormemente afectados al no existir uniformidad o unicidad en temas de tanta relevancia. ¿Cómo explicar a los miembros de la comunidad que situaciones antijurídicas ocurridas 20 o más años atrás pueden ser sancionadas por la vía de la nulidad pública y que otras situaciones de la misma naturaleza, incluso de menor tiempo, por criterios diversos tienen sencillamente una solución distinta? ¿Cómo es posible aceptar durante todo este tiempo que sobre la nulidad pública del inciso final del art. 7 de la Norma Fundamental, perteneciente al capítulo I relativo a las Bases de la Institucionalidad, se consientan resultados tan diametralmente opuestos? ¿Cómo seguir tolerando que la garantía fundamental, de igualdad ante la ley, en este caso la ley fundamental, siga siendo vulnerada?

En definitiva se trata de sincerar la problemática planteada y entender y concordar que se está afectando el estado de derecho mismo, cuestión que incumbe a todos, y que por lo mismo no es posible seguir aceptando más. Reconociendo la complejidad del tema, y aceptando que las posturas expuestas son legítimas y respetables, se requiere por lo mismo una regulación normativa que, en el sentido

que estime, zanje de manera definitiva la controversia planteada, y restaure de manera monolítica nuestro Estado de Derecho⁵.

⁵ La última parte de esta ponencia motivó que la Comisión de Derecho Administrativo de las XXXIII Jornadas estimara conveniente sugerir en las instancias correspondientes la necesidad de elaborar una regulación respecto de la nulidad de derecho público y en particular sobre la prescriptibilidad o no de su acción.